



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA PRIMERA DE DECISIÓN EN LO CIVIL

Medellín, diecinueve de abril dos mil veintitrés.

Tipo de pretensión: Responsabilidad Civil Extracontractual
Procedencia: Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín
Demandantes: Mariela del Socorro Mazo Echavarría y otros
Demandados: Fernando Arturo Giraldo y otros
Radicado: 05001 31 03 012 2020 00352 01
Decisión: Confirma

La sentencia anticipada es una figura jurídica consagrada en el artículo 278 del Código General del Proceso que permite al juez terminar un litigio cuando vislumbra situaciones que lo ameritan para evitar el desgaste de la jurisdicción. Dentro de los supuestos contemplados por la norma se encuentra la carencia de legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es un presupuesto material para que el juez dicte sentencia de fondo. Se refiere a que los sujetos que pretenden y resisten puedan hacerlo eficazmente de conformidad con la relación sustancial subyacente. Por ello, si con los anexos remitidos por los extremos litigiosos, el juzgador concibe carencia de legitimación, está llamado a terminar anticipadamente el proceso.

Tratándose de la responsabilidad civil por actividades peligrosas está llamado a responder el guardián de la actividad, es decir, aquella persona que tiene el poder intelectual de dirección y control. La ley presume como guardián al propietario inscrito. Es carga del pretensor demostrar el título de propiedad para hacer nacer la presunción en contra del demandado.

El demandado puede desvirtuar la presunción de guardianía si demuestra con certeza que, al momento de los hechos, no tenía la guarda de la actividad, es decir, que no poseía el poder intelectual de dirección y control.

Procede el Tribunal a resolver el recurso apelación interpuesto por la activa en contra de la sentencia anticipada del 21 de octubre de 2022, por la cual se declaró la falta de legitimación en la causa de los demandados Fernando Arturo Giraldo Jiménez, Transporte y Turismo 1ª S.A.S. y, SBS Seguros Colombia S.A., dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES

1. Demanda (Cp. Cpi.C01. Archv.02)

Mariela del Socorro Mazo Echavarría, María Angelica López Mazo, María Angelina López Mazo, Ramón Emilio López Mazo y Jesús Mariano López Mazo presentaron demanda con pretensión de responsabilidad civil extracontractual en contra de Carlos Mario Patiño Vergara, Fernando Arturo Giraldo Jiménez, Transporte y Turismo 1ª S.A.S. y pretensión directa frente a SBS Seguros Colombia S.A, por la muerte de su hija, hermana y madre, Yorladis López Mazo.

Como causa fáctica se indicó que el accidente ocurrió, el 15 de diciembre de 2017, cuando la señora Yorladis y María Angélica López Mazo caminaban por la berma de la vía que de Valdivia conduce a Tarazá. En ese momento, el autobús de placa LDE 058, propiedad de Fernando Arturo Giraldo Jiménez, afiliado a la empresa Transporte y Turismo 1ª S.A.S, y conducido por Carlos Mario Patiño Vergara, las arrolló. Como resultado del impacto, Yorladis falleció instantáneamente debido a politraumatismos.

Se mencionó que el siniestro se produjo debido a la explosión de una llanta del autobús LDE 058, lo que llevó al conductor a perder el control del vehículo y a chocar con el automotor de placas OMZ007 que estaba estacionado en el extremo de la vía. Posteriormente, el autobús impactó contra la montaña y arrolló a los peatones que se encontraban en la berma.

Estos hechos fueron conocidos por la Inspección Municipal de Tránsito y Transporte de Tarazá Antioquia, quien declaró contravencionalmente responsable al señor Carlos Mario Patiño Vergara. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación adelantó la investigación penal por homicidio culposo.

La activa precisó que la señora Yorladis, al momento de los hechos, tenía 36 años, trabajaba de forma independiente, se dedicaba a la producción y comercialización porcícola de una pequeña granja casera. Adicionalmente, se dijo que era la persona encargada de proporcionar el sustento económico a su familia, conformada por su madre, hijo y sus tres hermanos.

Se manifestó que, a causa del fallecimiento de Yorladis, los demandantes sufrieron perjuicios morales y de vida de relación por haber perdido a su ser querido, quien era la cabeza de su hogar. También se afirmó que el autobús, para la fecha de los hechos, contaba con una póliza de responsabilidad civil extracontractual con la empresa SBS Seguros Colombia S.A., por lo que esta estaba llamada a pagar los perjuicios ocasionados hasta el límite del valor asegurado.

Por todo lo anterior, la activa solicitó que se condenara al pago de los perjuicios, detallados así: \$78.593.758 por lucro cesante consolidado y futuro en favor de Jesús Mariano López Mazo en calidad de hijo de la señora Yorladis; 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes por perjuicios morales; 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes por daño en la vida de relación.

2. Contestaciones

2.1. De Transporte y Turismo 1ª S.A.S. (Cp. Cpi.C01. Archv.09)

La empresa Transporte y Turismo 1ª S.A.S. se opuso a las pretensiones y formuló las *excepciones* que denominó *inexistencia del nexo causal, hecho exclusivo de un tercero, falta de legitimación en la causa, terminación contrato de vinculación e inexistencia del lucro cesante futuro*.

Sobre los hechos indicó que no le constaba la ocurrencia del siniestro, el daño ocasionado, el trámite contravencional, los perjuicios alegados, ni el real conductor del vehículo. Lo anterior, toda vez que, para la fecha del accidente el autobús con placas LDE 058 había sido desvinculado de la compañía. En este sentido, se dijo que Transporte y Turismo 1ª S.A.S no tenía la guarda material ni jurídica del vehículo involucrado en el accidente, por lo que no está llamada a responder por los daños pretendidos, careciendo de legitimación en la causa dentro del proceso.

2.2. De Fernando Arturo Giraldo Jiménez (Cp. Cpi.C01. Archv.12)

Fernando Arturo Giraldo Jiménez contestó indicando que no le constaba la ocurrencia del siniestro, los daños ocasionados, los perjuicios reclamados, ni el procedimiento contravencional realizado. Adicionalmente, se manifestó que no era

cierto que él fuera el real propietario del autobús, toda vez que, desde el año 2010 se lo había vendido y entregado materialmente al señor Nelson Darío Jaramillo Parra, por lo que el demandado no gozaba de la calidad de guardián de la actividad peligrosa.

También, se dijo que el 10 de octubre de 2017, de acuerdo al contrato firmado entre Nelson Darío Jaramillo Parra y Rosalba Diaz Pérez, esta adquirió la propiedad del automotor y se solicitó la desvinculación del vehículo de la empresa de Transporte y Turismo 1ª S.A.S.

Por lo anterior, el demandado se opuso a las pretensiones, consideró que no estaba llamado a responder por falta de legitimación en la causa por pasiva, y propuso la *excepción previa* que denominó *no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios*.

2.3. De SBS Seguros Colombia S.A. (Cp. Cpi.C01. Archv.13)

SBS Seguros Colombia S.A. contestó admitiendo la ocurrencia del hecho, pero afirmó que no estaba obligada a responder, ya que, a partir del 17 de noviembre de 2017, la empresa Transporte y Turismo 1ª S.A.S. solicitó la eliminación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1011059 en relación con vehículo con placa LDE 058.

Por tales motivos propuso como mecanismo de defensa la *excepción* que denominó *falta de legitimación en la causa*, toda vez que, para la fecha de los hechos el vehículo no tenía un contrato de seguro vigente con la entidad demandada.

2.4. Carlos Mario Patiño pese a estar notificado por aviso, conforme el auto del 26 de julio de 2022 no contestó la demanda.

3. Sentencia anticipada (Cp. Cpi.C01. Archv.53)

El juzgado profirió sentencia anticipada el 21 de octubre de 2022, con base en el artículo 278 del Código General del Proceso, al considerar que se encontró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de los demandados: Fernando Arturo

Giraldo, Transportes y Turismo 1ª S.A.S. y SBS Seguros Colombia S.A., por las siguientes razones:

(i) Para la fecha de los hechos el vehículo no contaba con un contrato de seguro activo con la empresa SBS Seguros. Lo anterior, de acuerdo a la nota marginal de la póliza, al informe de consulta del RUNT, y al certificado enviado por SBS Seguros Colombia S.A. que dan cuenta que desde el mes de noviembre de 2017 el vehículo había sido excluido de la póliza.

(ii) Que el autobús LDE 058 desde el 10 de noviembre de 2017 había sido desvinculado de la empresa Transporte y Turismo 1ª S.A.S, tal como se evidenció en el certificado del RUNT. Por ello, se consideró que la empresa no tenía la guardia jurídica de la actividad peligrosa.

(iii) El despacho encontró probado que Fernando Arturo Giraldo no tenía la guardia material ni jurídica del vehículo, ya que lo había vendido y entregado a Nelson Darío Jaramillo Parra, quien a su vez se lo enajenó a Doralba Díaz Pérez. Esta conclusión se basó en los contratos de compraventa del vehículo automotor, la hoja de vida del propietario registrada en Transporte y Turismo 1ª, el certificado de paz y salvo, y la carta de bienvenida a Doralba Díaz Pérez de la Cooperativa de Transporte de Cáceres.

En consecuencia, el juzgado consideró que el demandado había desvirtuado la presunción de responsabilidad que recaía sobre él como propietario inscrito del vehículo, al demostrar que había cedido la guarda material y jurídica del mismo. Por lo tanto, no estaba legitimado para responder.

En este orden de ideas, el *a quo* desestimó las pretensiones de la demanda contra estos resistentes y ordenó seguir adelante el proceso contra Carlos Mario Patiño Vergara.

4. Apelación de la activa (Cp. Csg.Archv.05)

La activa apeló la sentencia anticipada del *a quo* con base en dos argumentos que desarrolló así:

(i) Incoherencia entre el fundamento normativo y el argumento desarrollado para dictar sentencia anticipada.

Los recurrentes expresaron que la juez de primera instancia cometió un error al fundamentar su decisión de sentencia anticipada en el numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso. Argumentaron que la *a quo* se centró en demostrar una supuesta falta de legitimación en la causa por pasiva, en lugar de basarse en la inexistencia de pruebas por practicar, como lo establece dicha norma.

En este sentido, para los apelantes no hubo una congruencia entre la norma invocada y el desarrollo argumentativo expresado por el juzgado.

(ii) Indebida, incompleta y parcializada valoración de la prueba respecto de cada uno de los demandados:

Los recurrentes desarrollaron este reparo tomando las premisas que el juzgado realizó sobre cada uno de los demandados, así:

- Sobre **SBS Seguros Colombia S.A.**, se afirmó que no había prueba en el expediente que demostrara que la aseguradora había enviado la notificación escrita de la cancelación del seguro, tal como lo exige el artículo 1071 del Código de Comercio. Además, la parte señaló que tampoco se demostró que Fernando Arturo Giraldo Jiménez hubiera remitido la solicitud de revocar el contrato de seguro, por lo que la simple anotación hecha por la aseguradora al pie de la póliza no es suficiente para demostrar dicha situación.

También se indicó que el documento que daba cuenta de la exclusión del vehículo estaba firmado electrónicamente solo por un funcionario de la aseguradora, por lo que no se podía comprobar que el tomador del seguro tuviera conocimiento de dicha situación, lo que invalida la cancelación.

Además, se expresó que, a diferencia de lo que interpretó el juzgado, para la parte, la información del RUNT demostró que el autobús contaba con un

seguro de responsabilidad civil extracontractual activo con esta empresa en la fecha de los hechos, ya que la anotación de cancelación no tenía una fecha de ejecución.

- En cuanto a **Transporte y Turismo 1ª S.A.S.**, los recurrentes manifestaron que la juez de primera instancia se equivocó al concluir que el vehículo en cuestión no estaba afiliado a dicha compañía. Según los apelantes, la información registrada en el RUNT indica que, para la fecha del accidente, el vehículo seguía afiliado a la mencionada empresa, ya que la tarjeta de operación tenía fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2017.

Además, señalaron que el *a quo* desestimó los informes de las autoridades de tránsito que confirmaban que el vehículo en cuestión estaba identificado con los colores y calcomanías de Transporte y Turismo 1ª S.A.S.

Por lo tanto, los recurrentes sostuvieron que la demandada tenía la guarda material y jurídica del vehículo al momento del accidente, y por ende, estaba legitimada en la causa para responder.

- Respecto a **Fernando Arturo Giraldo Jiménez**, los apelantes señalaron que el juzgado desconoció la prueba documental que reposaba en el expediente. De acuerdo con el certificado de propiedad emitido por la Secretaría de Movilidad de Medellín, el propietario inscrito es el demandado. Asimismo, se indicó que el supuesto contrato de compraventa celebrado entre el señor Giraldo Jiménez y Nelson Parra carece de claridad y validez, ya que no está firmado por las partes, no tiene fecha de suscripción y no tiene presentación personal ante notaría que permita presumir su autenticidad.

Además, se manifestó que no es cierto que Transporte y Turismo haya expedido una tarjeta de propiedad a favor del señor Nelson Darío Jaramillo. Tampoco se puede dar credibilidad a la venta que este hizo a la señora Doralba Díaz Pérez, ya que el señor Jaramillo estaba enajenando una cosa ajena y el acto jurídico nunca se formalizó ni se registró ante ninguna autoridad de tránsito.

Por último, se indicó que el juzgado no tuvo en cuenta la contradicción respecto a la guarda jurídica y material del vehículo por parte del señor Fernando Giraldo. El certificado de técnico-mecánica del 11 de octubre de 2017 aún lo refleja como propietario, cuando se supone que él se desprendió de la tenencia por el supuesto contrato de compraventa el 10 de octubre de 2017.

En este sentido, para la parte, el señor Fernando Arturo Giraldo, al momento de la ocurrencia de los hechos, tenía la guarda jurídica y material del vehículo, por lo que estaba legitimado en la causa para responder por los daños ocasionados.

Por las anteriores razones, los apelantes solicitaron al Tribunal que revoque la sentencia del juez de primera instancia, y se siga adelante el proceso en contra de los demandados: SBS Seguros Colombia S.A, Transporte y Turismo 1ª S.A.S., y Fernando Arturo Giraldo Jiménez.

5. Sobre el traslado del recurso

5.1. De SBS Seguros Colombia S.A. (Cp. Csg.Archv.07)

La aseguradora se opuso a la pretensión de los apelantes y solicitó al Tribunal que confirme el fallo impugnado. Respecto al primer punto, argumentó que el numeral utilizado por el juzgado para fundamentar la decisión de dictar sentencia anticipada carece de relevancia, ya que lo importante es el asunto de fondo que se resuelve en el referido fallo.

En cuanto al segundo punto de la apelación, la aseguradora reiteró que para la fecha de los hechos el vehículo estaba excluido de la póliza por petición del tomador, Transporte y Turismo 1ª S.A.S. Además, afirmó que ninguno de los otros demandados ha cuestionado este hecho. También se señaló que la apelante no tenía la facultad de cuestionar la forma en que las partes cancelaron la póliza, ya que es una relación entre la aseguradora y el cliente. En caso de ser una cancelación abusiva, sería el tomador quien debería alegarla, lo que no ha ocurrió en este caso.

Por último, se destacó que la anotación que figura en el RUNT debe ser interpretada en conjunto con las demás pruebas aportadas al proceso, las cuales evidencian que la cancelación de la póliza de seguro se realizó a partir del 17 de noviembre de 2017. Por lo tanto, esta aseguradora no tiene la obligación de responder por los posibles perjuicios derivados de los hechos objeto de la demanda.

5.2. De Transporte y Turismo 1ª S.A.S. (Cp. Csg.Archv.09)

La empresa de transporte se opuso a la petición de los impugnantes, sosteniendo que la prueba documental acredita que en el momento de los hechos el vehículo LDE 058 no estaba afiliado a dicha compañía, sino a Transporte de Cáceres.

Adicionalmente, se dijo que no encuentra error en la fundamentación jurídica de la sentencia anticipada, toda vez que el fallo en su integridad se basa en el numeral tercero del artículo 278 del CGP.

CONSIDERACIONES

1. Problemas Jurídicos

- ¿Cuáles son los supuestos para proferir sentencia anticipada en el ordenamiento procesal colombiano?; ¿Se afecta la congruencia de la sentencia cuando el fallador se equivoca citando un numeral del artículo que invocó para proferir la decisión—artículo 278 CGP—, aun cuando en el desarrollo argumentativo se expone de forma clara otro supuesto normativo?
- ¿Quiénes están legitimados en la causa por pasiva ante una pretensión de responsabilidad civil extracontractual por el ejercicio de una actividad peligrosa?
- ¿Qué condiciones de orden sustancial deben considerarse para establecer la guardia material y/o jurídica de una actividad peligrosa? ¿Qué cargas probatorias deben cumplirse en estos supuestos cuando se formula una

pretensión de responsabilidad civil extracontractual por daños ocasionados en ejercicio de actividad peligrosa?

- ¿Es posible dictar sentencia anticipada por ausencia de práctica de pruebas cuando de cara a los extremos litigiosos inicialmente presentados por las partes se confirma la ausencia de guarda material y/o jurídica de la cosa con la que se ejerce la actividad peligrosa?

2. Marco normativo

2.1 La sentencia anticipada por falta de legitimación en la causa

El Código General del Proceso (CGP), en su artículo 278, estableció la posibilidad de terminar un proceso mediante una sentencia anticipada en los siguientes eventos: (i) cuando las partes lo soliciten de mutuo acuerdo; (ii) cuando no hay pruebas por practicar; y, (iii) cuando se encuentra probada la caducidad, cosa juzgada, prescripción extintiva, transacción y falta de legitimación en la causa. Esta sentencia permite al juez concluir un proceso sin la necesidad de recorrer todas sus etapas, garantizando la aplicación de los principios procesales de eficiencia, celeridad y economía.

La finalidad de la sentencia anticipada es evitar el desgaste del aparato jurisdiccional cuando se vislumbran situaciones jurídicas que ameritan la terminación de un proceso. Para ello, el juez debe argumentar alguno de los supuestos ya referidos. Vale destacar que resulta posible proferir sentencia de fondo o de mérito en los eventos de los primeros dos numerales, siempre y cuando se cumplan las condiciones mencionadas en la norma procesal. Así, el juez podría dictar un fallo estimatorio o desestimatorio de las pretensiones, y/o en la que se declare no probada las excepciones de mérito propuestas.

Los eventos considerados en el numeral 3 del artículo 278. CGP, como son los concernientes a la cosa juzgada, prescripción extintiva, transacción, caducidad, y carencia de legitimación en la causa, atienden a otro tipo de consideraciones. Salvo el caso de la prescripción, excepción de merito que debe ser alegada expresamente

por el opositor (art.282 CGP), los referidos eventos imponen que el juez, aún en ausencia de alegación de parte, deba terminar anticipadamente el proceso a efectos de evitar un derroche inútil de jurisdicción.

Tratándose de la carencia de legitimación en la causa, presupuesto material para la sentencia de fondo o de mérito, todo proceso exige que el juez verifique que los sujetos que pretenden y resistan puedan hacerlo eficazmente de conformidad con lo que establece la norma sustancial. De nada serviría que el juez continúe el proceso frente a unos sujetos que no tienen la aptitud para participar a título de partes, si lo que ellas plantean en sus extremos litigiosos (demanda y respuesta), incluyendo los propios anexos o documentos que aportan en las fases liminares de integración del contradictorio, no permite establecer un vínculo entre sus titularidades procesales y las sustanciales sobre las que se controvierte.

Así las cosas, dependiendo del tipo de pretensión habrá de establecerse, a efectos de verificar su legitimación, si las partes que se presentan en el proceso para pretender o para resistir, con base en las normas sustanciales, se corroboran como acreedor o deudor, como víctima o agente responsable del daño, etc. Si las “pruebas” o documentos que las partes aportan con sus escritos iniciales confirma la carencia de legitimación, el juez no tendría que agotar un proceso inútil en el que ya los propios extremos litigiosos y sus anexos complementarios le relevarían de decretar y practicar pruebas adicionales o de hacer un posterior análisis de fondo sobre presupuestos axiológicos de lo pretendido.

Vale destacar que lo anterior no es óbice para que pueda dictarse sentencia anticipada, en aplicación del supuesto contemplado en el numeral 2 del artículo 278 del CGP, cuando se advierta que luego de decretadas y practicadas pruebas, se cuente con los elementos suficientes para tomar una decisión de fondo, como sería el caso de la ausencia de presupuestos axiológicos de lo pretendido, lo que conduciría a la desestimación de las súplicas de la demanda.

Es relevante precisar que la terminación temprana de un proceso, conforme con los supuestos contemplados en el artículo 278, está precedida fundamentalmente por una motivación suficiente y adecuada de la causa que sustenta la sentencia. Ese es el límite legal, sin que imprecisiones o citas inadecuadas sobre sus

numerales signifiquen el sacrificio de principios o garantías del debido proceso, incluyendo la congruencia. Se trata de comprender el alcance de la figura de la sentencia anticipada y de entender los deberes que asume el juez para evitar derroche innecesario de jurisdicción.

2.2 La responsabilidad en el ejercicio de actividades peligrosas

Tratándose de la responsabilidad civil por el ejercicio de las actividades peligrosas, el ordenamiento jurídico ha sido pacífico al establecer que el llamado a responder es el guardián de la actividad. Es decir, aquella persona que tiene el poder intelectual de dirección y control de la cosa cuando se produce el hecho dañoso. En principio, la ley presume que la guardia está en cabeza del propietario; toda vez que, el derecho de dominio implica las facultades de usar y disponer la cosa.

Ahora bien, esta presunción de derecho admite prueba en contrario. El propietario que se presume responsable puede demostrar que ha transferido la custodia de la actividad, y por tanto el llamado a responder sería quien en realidad tuvo el uso, dirección y control al momento de la ocurrencia de los hechos¹. Esta posición ha sido desarrollada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al expresar que:

El responsable por el hecho de las cosas inanimadas es su guardián, o sea, quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes. Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero si lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario. ... O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener (sic). Y la presunción de guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada.²

En otras palabras, un propietario inscrito de “una cosa que se utiliza para una actividad peligrosa” es responsable por los daños que pueda causar. Sin embargo, puede exonerarse de esta responsabilidad si logra demostrar, de manera contundente, que no tenía la guardia de la actividad al momento de los hechos, ya sea por haber enajenado la cosa por un título jurídico o por una situación de hecho. Si no logra desvirtuar esta presunción, el propietario será responsable en virtud del

¹ Tamayo (2018). Tratado de Responsabilidad Civil: Tomo I. Bogotá: Legis P.898

² Corte Suprema de Justicia. (2011) Exp.2005-00345. MP. Willian NamenVargas

régimen de responsabilidad “objetiva” o de culpa “presunta”, según la posición jurídica que se tenga, pero que, en todo caso, consideraría que la culpa no es un presupuesto necesario para la pretensión resarcitoria. Asimismo, esta tesis ha sido acogida recientemente por esta Sala de Decisión, en sentencia con ponencia del magistrado Sergio Raúl Cardoso González, en la que se estableció que:

El criterio determinante (para indilgar responsabilidad es) el gobierno, administración, dirección o control efectivo de la actividad, la propiedad inscrita no impone sin más la declaratoria de responsabilidad del titular, en tanto solo comporta una presunción de guardiana, la cual admite prueba en contrario, siempre que acredite con suficiencia que se desprendió de la potestad de dirección, mando y control³

Ahora bien, en algunos eventos, puede darse una acumulación de guardias en el ejercicio de actividades peligrosas, como ocurre cuando el dueño de una cosa afilia está a una empresa que presta la actividad en cuestión, por ejemplo, cuando un autobús se afilia a una empresa de transporte⁴. En estos casos, la responsabilidad recae *a priori* en el propietario y en la empresa afiliadora, quienes se presumen como guardianes de la actividad al tener la capacidad intelectual de control y dirección sobre la misma. Por ello, la víctima para demandarlos solidariamente debe acreditar: (i) la propiedad del vehículo; y (ii) la afiliación del vehículo a la empresa. Pero, los demandados pueden exonerarse de la responsabilidad demostrando que la guarda estaba en cabeza de un tercero, por lo que carecerían de legitimación en la causa para resistir.

3. Caso Concreto

3.1. Sobre el error en el fundamento normativo

Como primer reparo a la sentencia del *a quo*, los apelantes indicaron que la providencia contenía una contradicción que afectaba el deber de congruencia, toda

³ Tribunal Superior de Medellín-Sala Primera de Decisión Civil. Sentencia 24 marzo 2023. Exp.009 2017 00653. MP. Sergio Raúl Cardoso González

⁴ Esto ha sido desarrollado ampliamente por la Corte Suprema de Justicia-Sala Civil. Ejemplo de ello es lo expuesto en la sentencia SC4428-2014.MP. Fernando Giraldo Gutiérrez, que tratando la guarda compartida dijo: “Así mismo, el concepto de guardián no repele la eventual existencia de una “*guarda compartida*”, de poderseles imputar a varios sujetos la responsabilidad en la realización del daño, producto de una actividad riesgosa, porque de una u otra forma ejercen, todos ellos, control y dirección efectiva sobre la “*actividad*”.

vez que el fundamento normativo fue el artículo 278.2 del CGP cuando, en efecto, había pruebas por practicar.

Al respecto, la Sala encuentra que tal reparo carece de relevancia para revocar la providencia. No se puede perder de vista que si bien en los dichos preliminares del fallo se invocó el artículo 278.2 del CGP, todo el desarrollo argumentativo giró en acreditar la carencia de legitimación en la causa por pasiva. Es decir, que en una lectura integral de la providencia, se comprende que en todo momento el fundamento normativo fue el artículo 278.3, que faculta al fallador dictar sentencia anticipada si evidencia carencia de legitimación en las partes procesales.

Pero no se olvide que en el escenario del debate procesal, aun cuando ya se hayan decretado y practicado pruebas, no puede imponerse límite alguno al juez para que dicte sentencia anticipada si encuentra material confirmatorio suficiente para establecer una ausencia de guardia de la cosa con la que se ejerce actividad peligrosa. Que se cite como fundamento normativo el numeral 2 del artículo 278 del CGP, y no el 3, no evidencia una irregularidad, más bien una posibilidad que se tiene para proveer de mérito cuando el juez advierta que la propia prueba practicada confirma la ausencia de guardia, sin que tenga que practicar pruebas adicionales.

Para el Tribunal, en este contexto, no hay errores que cuestionar, no hay violación al deber de congruencia. La providencia está plenamente fundamentada en causales de sentencia anticipada y por esto, el reparo ha de ser desestimado. Aunque se considerara un error de escritura, la causa desarrollada por la juez si es motivo para dictar sentencia anticipada.

3.2. Sobre la falta de legitimación en la causa de los codemandados y el tema de la guarda ejercida

Como los recurrentes presentaron de forma individual los reparos frente a las consideraciones de cada uno de los demandados, la Sala abordara el estudio a partir de dicha distinción así: (i) El propietario inscrito del vehículo; (ii) Empresa afiliadora; y, (iii) Compañía de seguros.

(i) Propietario inscrito del vehículo: Fernando Arturo Giraldo Jiménez

La parte apelante expresó su desacuerdo con la decisión de la juez, argumentando que el demandado no logró desvirtuar su calidad de guardián, por ser el propietario del vehículo, tal como lo indica el documento expedido por la Secretaría de Movilidad de Medellín. Según los recurrentes, las pruebas documentales presentadas por el demandado para cuestionar su responsabilidad son inadmisibles, ya que resultan irrelevantes e insuficientes para desvirtuar la prueba presentada por la parte actora.

Al respecto, la Sala considera que la activa satisfizo de manera liminar su carga probatoria para considerar la presunción de guardia en contra del demandado, con los anexos incorporados en su demanda, ya que allegó documento sobre la propiedad del vehículo en cabeza de Fernando Arturo Giraldo Jiménez, mediante el certificado de propiedad expedido por la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín⁵. A su vez, el demandado contravirtió la presunción referida desde su escrito de respuesta, aportando prueba que revela con alto grado de certeza de que otra persona, para el momento de los hechos, tenía la capacidad intelectual de dirección y control de la actividad peligrosa.

Sobre el asunto, el Tribunal encuentra que el certificado de propiedad muestra que el señor Fernando Arturo Giraldo Jiménez adquirió el dominio del vehículo LDE 058, el 27 de agosto de 2009⁶:

tel:2654766
- 27/08/2009 VENDE: RICARDO OSORIO SUAREZ con CC N° 3615878, CARRERA 65 C # 31 - 27 de MEDELLIN
tel:2654766 COMPRA: FERNANDO ARTURO GIRALDO JIMENEZ con CC N° 1037070041, DG 43C 37 46 de BELLO
tel:4822020

Posteriormente, según se expuso en la contestación a la demanda, como lo evidenciado en el documento denominado “Contrato de Compraventa de Vehículo Automotor”⁷ el señor Fernando Giraldo le vendió el autobús a Nelson Jaramillo. Aunque los recurrentes cuestionaron la validez de este documento por falta de firma de los contratantes, fecha de suscripción y autenticación en notaría, la Sala considera que esta prueba, al ser valorada en conjunto con los demás medios de

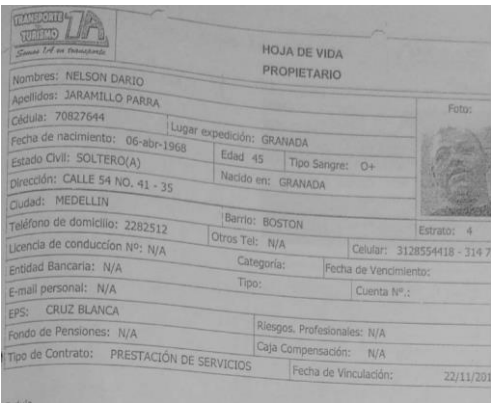
⁵ Cfr.Cp- Cpi- Archv.02 P. 70

⁶ Cfr.Cp- Cpi- Archv.02 P. 70

⁷ Cfr-Cp-Cpi-Archv.12 P.11

convicción, confirma el desprendimiento por parte del demandado del vehículo automotor.

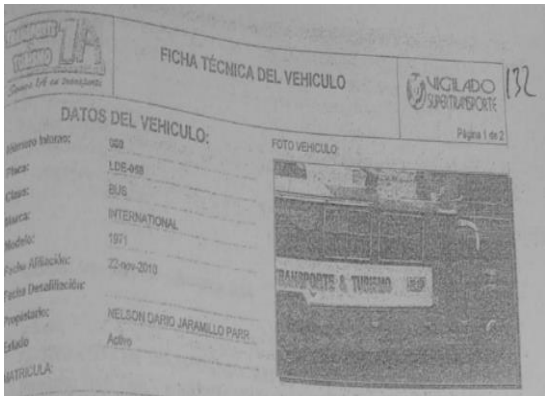
Nótese que el documento sí tiene una fecha de suscripción- septiembre 17 de 2010- en donde se narra las formas en que se pagaría los \$17.000.000 acordados para la venta. Aunque el documento no se adjuntó de forma completa y no se puede evidenciar la firma de los contratantes, el Tribunal considera que, a partir de ese momento, el señor Nelson Jaramillo se convirtió en el “dueño del autobús”, ya que el documento denominado “Hoja de vida de propietario”⁸ y la “Ficha Técnica del Vehículo”⁹ expedidos por Transporte y Turismo 1^a lo refleja como “propietario”.



HOJA DE VIDA PROPIETARIO

Transporte y Turismo 1ª

Nombre: NELSON DARIO
Apellidos: JARAMILLO PARRA
Cédula: 70827644
Fecha de nacimiento: 06-abr-1968
Lugar expedición: GRANADA
Estado Civil: SOLTERO(A)
Edad: 45
Tipo Sangre: O+
Dirección: CALLE 54 NO. 41 - 35
Nacido en: GRANADA
Ciudad: MEDELLIN
Teléfono de domicilio: 2282512
Barrio: BOSTON
Estrato: 4
Licencia de conducción N°: N/A
Otros Tel: N/A
Celular: 3128554418 - 314 7
Entidad Bancaria: N/A
Categoría: Fecha de Vencimiento:
E-mail personal: N/A
Tipo: Cuenta N°:
EPS: CRUZ BLANCA
Fondo de Pensiones: N/A
Riesgos Profesionales: N/A
Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Caja Compensación: N/A
Fecha de Vinculación: 22/11/2010



FICHA TÉCNICA DEL VEHICULO

Transporte y Turismo 1ª

ANCLADO REGISTRADO 132

Página 1 de 2

DATOS DEL VEHICULO:

Motor: 3000
Marca: LDB-400
Clase: BUS
Marca: INTERNATIONAL
Modelo: 1971
Fecha Afiliación: 22-nov-2010
Fecha Desafiliación:
Propietario: NELSON DARIO JARAMILLO PARRA
Estado: Activo
Matrícula:

Si la activa dudaba de la legitimidad del documento aportado como anexo por la pasiva, era su deber haberlo controvertido al momento de descorrer las excepciones, solicitando la respectiva ratificación, conforme el artículo 262 del CGP. No obstante, ello no se solicitó.

Además, para el Tribunal, la venta entre el señor Fernando y Nelson fue efectiva materialmente, ya que este último fue quien suscribió el contrato de administración con Transporte y Turismo 1^a el 05 de octubre de 2016¹⁰.



⁸ Cfr-Cp-Cpi-Archv.12 P.12

⁹ Cfr-Cp-Cpi-Archv.12 P.13

¹⁰ Cfr.Cp-Cpi-Archv.09 P.27

Clausula Novena: Renovación de parque automotor - : al momento de cumplirse la edad de reposición del vehículo por parte de EL PROPIETARIO, este deberá si es su interés de seguir con el contrato de administración de flota, llevar el vehículo que reemplazara al otro para hacerle la respectiva ficha técnica y los requerimientos para el normal funcionamiento del mismo, dicha actividad deberá realizarse con Un (1) año de anterioridad al vencimiento de la fecha para retirar el vehículo del parque automotor, en caso de no hacerlo EL TRNSPORTADOR se reserva la facultad de continuar con el contrato de administración de flota, sin que haya lugar por parte de EL TRANSPORTADOR de pagar ningún tipo de retribución ni devolver los dineros causados.

En constancia se firma en original y copia como aparece al pie de la firma, miércoles, 05 de octubre de 2016

LA EMPRESA	EL CONTRATISTA
	
NOMBRE: JANETH CRISTINA PINILLOS PEREZ	NOMBRE NELSON DARIO JARAMILLO PARR
C.C. No. : 43114194	C.C. No. : 70827644
Representan Legal	

También porque en el año 2017, el señor Jaramillo vendió el autobús a la señora Doralba Diaz Pérez, según se desprende del documento llamado “Contrato de Compraventa Vehículo”¹¹ suscrito el 10 de octubre en la Notaría 24 de Medellín.

CONTRATO DE COMPRAVENTA VEHICULO

VENDEDOR	COMPRADORA
NELSON DARIO JARAMILLO PARRA C.C. 70 827 644 de Granada Dir. Cra. 80 No. 95 102 Tel. 312 855 44 18	DORALBA DIAZ PEREZ C.C. 21 587 368 de Cáceres Dir. Municipio de Cáceres Tel. 310 506 16 28

Por medio del presente contrato de Compra-Venta, EL COMPRADOR declara haber recibido real y materialmente el automotor descrito en este documento a completa y entera satisfacción y se obliga además a pagar el precio en la forma pactada en el mismo, pago que se efectuará en Medellín en moneda colombiana de curso legal.

VEHICULO	COLOR	MODELO	TIPO
BUS	BLANCO Y VERDE	1971	CERRADA
CAPACIDAD	MOTOR	CHASIS	SERIE
34 PSJS	F16060074T	H060249	H060249
MARCA	SERVICIO	PLACAS	EMPRESA
INTERNATIONAL	PUBLICO	LDE 058	

Matricula a nombre de: Fernando Arturo Giraldo Jimenez

CONDICIONES DE PAGO:

Se vende el vehículo ya detallado por la suma de CATORCE MILLONES DE PESOS (\$14.000.000.00)

FORMA DE PAGO:

Sobre este último documento, la apelante dijo que carecía de validez, toda vez que el señor Nelson estaba enajenando cosa ajena. No obstante, el Tribunal estima que, si bien el señor Jaramillo no tenía la titularidad plena del autobús, pues no se había satisfecho el requisito de inscripción del artículo 47 del Código Nacional de Tránsito, lo cierto es que el contrato suscrito en la Notaría 24 de Medellín da a entender el acuerdo de voluntades de ceder la posesión y tenencia material del autobús a la señora Doralba.

Para la Sala, lo anterior demuestra que para esa fecha – 10 de octubre de 2017- el señor Nelson tenía la posesión del automotor, gracias al negocio celebrado en el

¹¹ Cfr-Cp-Cpi-Archv.12 P.14

2010 con el señor Fernando, pudiendo enajenar y entregar materialmente el vehículo a la señora Pérez.

Es más, el Tribunal considera que la entrega del vehículo por parte del señor Jaramillo a la señora Pérez se realizó materialmente, toda vez que el autobús fue desafiliado de la empresa Transporte y Turismo 1ª S.A.S, el 10 de noviembre de 2017, conforme pactaron las partes en el contrato de compraventa, y se evidencia en el documento denominado “Paz y Salvo”¹² y el certificado del RUNT¹³. Además, porque existe una carta de bienvenida expedida por la Cooperativa de Transportadores de Cáceres a la señora Díaz Pérez por la afiliación del vehículo LDE 058¹⁴.

Es importante destacar que la presunción de guardianía no se desvirtúa únicamente acreditando el dominio en cabeza de otro, sino que puede ser desvirtuada acreditando circunstancias de hecho que lleven a que el propietario inscrito no tenga dirección, manejo ni control de la actividad en cuestión. En el caso que nos ocupa, se demostró desde los anexos preliminares del contradictorio que el propietario inscrito - Fernando Giraldo- había transferido la posesión del autobús LDE058 mediante negocios jurídicos con otras personas. Aunque estos negocios no cumplen los requisitos para efectuar la tradición jurídica, indican que el señor Giraldo no tenía el control ni la dirección de la actividad en el momento en que se produjo el daño.

Por otro lado, la apelante alegó que el *a quo* no tuvo en cuenta la contradicción entre la supuesta entrega del vehículo a la señora Doralba el 10 de octubre de 2017 y lo escrito en el certificado de técnico mecánica del 11 de octubre de 2017, en el que se identifica al demandado Giraldo Jiménez como el propietario. Al respecto, el Tribunal considera que es comprensible dicho documento muestre el nombre de Fernando, ya que él aún estaba inscrito en la matrícula de propiedad, debido a que no realizó el trámite de traspaso ante la Secretaría de Movilidad. Esto no implicaba que el señor Giraldo Jiménez conservara el poder intelectual de dirección y control del vehículo.¹⁵

¹² Cfr-Cp-Cpi-Archv.12 P.21

¹³ Cfr-Cp-Cpi-Archv.12 P.22

¹⁴ Cfr.Cp-Cpi-ARchv.12. P.25

¹⁵ Cfr.Cp-Cpi-Archv.12 P. 24

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

ONAC
ISO/IEC 17020:2012
09-01N-059

SERVISUPER LTDA.
CALLE 80 # 51C-35 MEDELLÍN
8110066657 PBX: 4481870

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHÍCULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2017-10-11 11:24:52	GIRALDO JIMENEZ FERNANDO ARTURO	CC (X) NIT () CE () No: 1037070041	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CH 83 95A 48	5871753	MEDELLÍN	Antioquia

Así las cosas, la Sala considera que el demandado logró demostrar con certeza que, para la fecha del siniestro ocurrido el 15 de diciembre de 2017, ya no era el guardián del vehículo, a pesar de seguir siendo el propietario inscrito. Aunque las ventas no se habían formalizado jurídicamente debido a la falta de traspaso, se acreditó que los contratos de compraventa habían llevado a la pérdida de la posesión del vehículo por parte del señor Giraldo Jiménez mucho antes del accidente.

En este sentido, el Tribunal, considera que las razones esgrimidas por la *a quo* sobre la ausencia de guarda del pasivo son correctas, por lo que se confirmará lo resuelto sobre el punto.

(ii) Empresa afiliadora: Transporte y Turismo 1ª S.A.S.

Los recurrentes argumentaron que la *a quo* no tuvo en cuenta la fecha de vencimiento de la tarjeta de operación del vehículo registrado en el RUNT, la cual expiraba el 31 de diciembre de 2017. Asimismo, alegaron que el juzgado no consideró las calcomanías que identificaban a la empresa demandada como la responsable de la actividad de transporte.

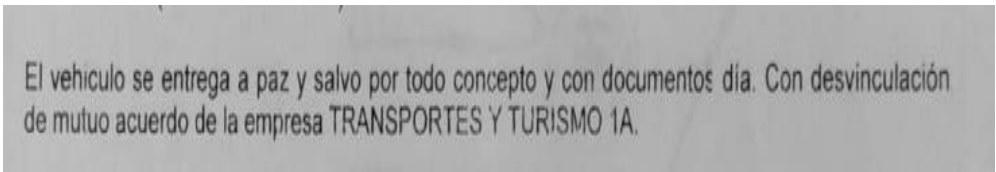
Por otro lado, al responder al recurso presentado, Transporte y Turismo 1ª S.A.S. afirmó que en el proceso había quedado demostrado que para la fecha del siniestro el autobús en cuestión ya no se encontraba afiliado a la compañía.

Al respecto la Sala ha encontrado con los documentos preliminares que, si bien el certificado del RUNT indica que el vehículo de placas LDE 058 estaba afiliado a la empresa Transporte y Turismo 1ª S.A.S. hasta el 31 de diciembre de 2017, también es cierto que: (i) la anotación se encontraba cancelada, de acuerdo a la nota de estado

de vigencia¹⁶; y, (ii) la misma entidad pública certificó que el autobús fue desafiliado el 10 de noviembre de 2017, por una solicitud denominada “COMUN_ACUERDO”¹⁷.

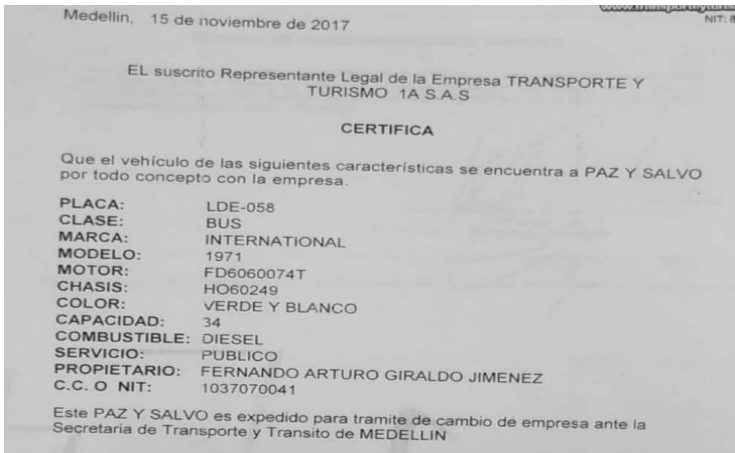


Adicionalmente, la desafiliación del vehículo coincide con los hechos descritos en la contestación del señor Fernando Giraldo¹⁸, como lo afirmado por la empresa de transporte¹⁹. Además, es coherente con la situación del autobús durante los meses de octubre y noviembre de 2017, tal y como se desprende del contrato de compraventa²⁰ suscrito entre el señor Jaramillo y la señora Díaz, en el cual se estipulaba que el automóvil debía ser desafiliado de la empresa Transporte y Turismo 1ª S.A.S.



También, se debe tener en cuenta para el 15 de noviembre de 2017 la empresa Transporte y Turismo 1ª S.A.S. expidió un certificado de paz y salvo²¹ para el trámite de cambio de empresa afiliadora que se estaba llevando en la Alcaldía de Medellín.

¹⁶ Cfr.Cp-Cpi-Archv.02 P.77
¹⁷ Cfr.Cp-Cpi-Archv.12 P.22
¹⁸ Cfr.Cp-Cpi-Archv.12
¹⁹ Cfr.Cp-Cpi-Archv.09
²⁰ Cfr.Cp-Cpi-Archv.12 P.14
²¹ Cfr.Cp-Cpi-Archv.12 P.21



Por lo anterior, para el Tribunal, resulta lógico considerar que en el momento del accidente vial, la empresa Transporte y Turismo 1ª S.A.S. no tenía la responsabilidad de la conducción, ya que el vehículo había sido desafiliado de la compañía un mes antes del accidente.

Ahora bien, aunque los apelantes indicaron que las calcomanías y los colores representativos daban cuenta de que el autobús estaba afiliado a la empresa demandada, la Sala considera que con el material probatorio obrante en el expediente ello no se comprueba. Nótese, no solo la calidad de las fotografías aportadas, en blanco y negro, que no permiten identificar con absoluta claridad, los colores e insignias del vehículo²²; sino que las mismas, por sí, no son prueba suficiente para restar fuerza probatoria a lo que representa el certificado de la entidad pública, que da cuenta de que el vehículo ya estaba desafiliado un mes antes de la ocurrencia del siniestro. Téngase presente que la presunción que reposaba en el proceso, en lo concerniente a la guarda se desvirtuó por el certificado de la autoridad correspondiente que dio cuenta de la desafiliación del vehículo.

Así las cosas, como en el expediente no obran prueba que permita evidenciar la guarda de la actividad peligrosa a cargo de la demandada, el Tribunal mantendrá en firme la decisión que la *a quo* tomó al respecto en lo que concierne a Transporte y Turismo 1ª S.A.S.

(iii) Compañía de seguros: SBS Seguros Colombia S.A.

²² Cfr.Cp-Cpi-Archv.02 P.96

Los recurrentes manifestaron que la juez no tuvo en cuenta que la supuesta cancelación del seguro no fue notificada según las reglas del artículo 1071 del Código de Comercio, como tampoco se valoró que el tomador del seguro no estuviera enterado, ni que en el registro del RUNT no haya una fecha exacta de cancelación de la póliza.

Por su parte SBS Seguros Colombia S.A. dijo que la activa no estaba legitimada para cuestionar la forma como el tomador del seguro y la aseguradora dieron por terminado el contrato de seguro. Se indicó que la fecha de cancelación de la póliza que obra en el RUNT coincide con la desafiliación que Transporte y Turismo 1ª S.A.S. hizo del vehículo en el mes de noviembre de 2017.

Para la Sala no hay duda de que el vehículo de placas LDE 058 tuvo una póliza de responsabilidad civil extracontractual, identificada con el No. 1011059, con la compañía SBS seguros Colombia; cuyo tomador era la empresa Transporte y Turismo 1ª S.A.S., tal como se desprende del contrato de seguro²³, certificación de la compañía de seguro²⁴ y certificado del RUNT²⁵.

Ahora bien, la demandada en la contestación expresó que por solicitud del tomador el vehículo había sido excluido de la póliza el 17 de noviembre de 2017. Ese hecho fue confirmado en la respuesta de la empresa de transporte, ya que la pasiva aseguró que para la fecha del siniestro el vehículo no se encontraba amparado por la póliza de SBS Seguros, porque fue cancelada al momento de la desvinculación del automotor.

Para la Sala estas manifestaciones tienen sustento en los anexos documentales del expediente. Nótese que de acuerdo al contrato de compraventa entre Nelson Jaramillo y Doralba Diaz, el paz y salvo de Transporte y Turismo 1ª S.A.S. y el certificado de desafiliación del RUNT; el vehículo LDE 058 fue desvinculado de la empresa transportadora por mutuo acuerdo de las partes – Transporte y Turismo 1ª y Nelson Jaramillo-

²³ Cfr.Cp-Cpi-Archv.06 P.14

²⁴ Cfr.Cp-Cpi-Archv.06 P.13

²⁵ Cfr.Cp-Cpi-Archv.06 P.20

En este sentido, para el Tribunal, resulta coherente afirmar que, si el vehículo fue desafiliado de la empresa que adquirió el seguro el 10 de noviembre de 2017, esta habría solicitado la exclusión del amparo patrimonial correspondiente. De acuerdo con los documentos aportados²⁶, dicha solicitud de exclusión se efectuó el 17 de noviembre de 2017, lo cual respalda esta interpretación de los hechos realizada por los codemandados.

Más aún, esta situación tiene relación con la nota de cancelación que se refleja en el estado del seguro del RUNT. El hecho de que no tenga una fecha exacta de cancelación no significa que para el 15 de diciembre de 2017 el vehículo se encontraba amparado por este seguro. Por el contrario, al analizar los hechos que rodearon al autobús durante los meses de octubre y noviembre del 2017, se puede deducir que después de la enajenación realizada a la señora Doralba Pérez y la desafiliación de Transporte y Turismo 1ª S.A.S., también se excluyó el amparo patrimonial que se tenía con SBS Seguros Colombia S.A.

Pólizas de Responsabilidad Civil							
Número de póliza	Fecha expedición	Fecha Inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
21101000242	01/02/2017	24/01/2017	21/01/2018	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	CANCELADA	Detalle
23061011059	14/02/2017	24/01/2017	21/01/2018	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	CANCELADA	Detalle

Ahora bien, para el Tribunal, el argumento del recurrente en relación con el incumplimiento de las reglas para la cancelación del seguro establecidas en el Código de Comercio no resulta relevante. Tanto en la contestación a la demanda por parte del tomador del seguro como de la compañía aseguradora, se indica que fue Transporte y Turismo 1ª S.A.S. quien solicitó la exclusión del vehículo, por lo que SBS Seguros no estaba obligada a remitir un informe escrito al asegurado. Además, considera la Sala que si el tomador del seguro o el asegurado hubieran considerado que la póliza seguía vigente con la compañía demandada, habrían

²⁶ Cfr.Cp-Cpi-Archv.06

expresado esta situación al contestar el libelo. Por el contrario, lo que se encontró fue que los demás resistentes negaron la vigencia de este amparo patrimonial.

Por otro lado, el Tribunal considera que el hecho de que los documentos aportados por la aseguradora solo estén firmados por una funcionaria de la compañía no resta valor probatorio a los mismos, como lo expresaron los recurrentes. Por el contrario, estos documentos corroboran otros hechos presentados por los demás sujetos procesales, tales como la desafiliación del vehículo de la empresa Transporte y Turismo 1ª S.A.S. el 10 noviembre de 2017 y la solicitud de exclusión del seguro el 17 de noviembre.

En vista de lo anterior, dado que el autobús no se encontraba asegurado con SBS Seguros para el 15 de diciembre de 2017, el Tribunal concluye que esta compañía tampoco está llamada a responder en virtud de lo pretendido por los actores, y, por consiguiente, se mantendrá la decisión que la juez de primera instancia tomó al respecto.

4. Costas

A pesar de que el recurso se resolverá de forma desfavorable, la Sala se abstendrá de condenar en costas por estar las recurrentes amparadas de pobres²⁷, conforme el artículo 154 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Decisión en Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

²⁷ Cfr.Cpi-Archv.03 *Auto que admite la demanda*

RESUELVE:

Primero: Confirmar la sentencia anticipada del 21 de octubre de 2022 del Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

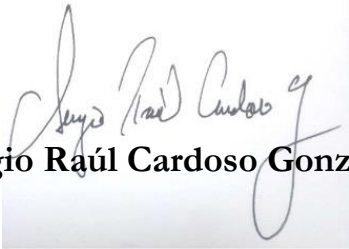
Los magistrados



Martín Agudelo Ramírez



José Omar Bohórquez Vidueñas



Sergio Raúl Cardoso González